



**Medellín, dieciséis (16) de febrero dos mil veintitrés (2023)**

**REFERENCIA:** RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL  
**DEMANDANTE:** MARTHA CECILIA MORELO VERGARA  
**DEMANDADO:** BANCOLOMBIA S.A.  
**PROCEDENCIA:** JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**RADICADO:** 05001-31-05-015-2020-00074-01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante MARTHA CECILIA MORELO VERGARA, contra el auto interlocutorio del 2 de noviembre de 2022, dictado por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se negó el decreto de pruebas solicitadas en el libelo genitor, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por MARTHA CECILIA MORELO VERGARA en contra de BANCOLOMBIA S.A.

### **1. ANTECEDENTES:**

La señora MARTHA CECILIA MORELO VERGARA demanda a BANCOLOMBIA S.A., pretendiendo que se declare la existencia de una relación laboral. Además peticona que se declare que fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL, desde el año 2005 hasta la terminación del contrato, y que como consecuencia de ello, se le reajusten las prestaciones sociales, bajo los parámetros convencionales, así como la indemnización por despido sin justa causa al ser beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia; y en caso de ser reintegrada a BANCOLOMBIA se haga en el cargo que venía desempeñando o en otro de superior jerarquía, sin solución de continuidad, con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, desde la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. También pretende la demandante que las bonificaciones que recibía por cumplimiento de metas, constituya factor salarial con incidencia en las prestaciones

legales y extralegales, así como en la indemnización por despido injusto e indemnización moratoria.

Subsidiariamente solicita la actora el reconocimiento de los derechos convencionales desde el 1 de enero de 2017 hasta el momento final de contrato, por extensión de los beneficios convencionales, dado que las organizaciones sindicales titulares del acuerdo colectivo son mayoritarias; así que, en caso de no ser reintegrada solicita que condene a BANCOLOMBIA a pagarle la diferencia existente entre la indemnización por despido injusto cancelada y la que se encuentra consagrada en el artículo 38 de la convención colectiva de trabajo 1999-2001, vigente en la convención 2017-2020; sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T; y el reembolso de los descuentos ilegales retenidos con la liquidación final del contrato de trabajo.

Y como, segunda pretensión subsidiaria, solicita la demandante, que, en el evento de no concederse los beneficios pactados en la convención colectiva de trabajo, se determinará si se debe condenar a la demandada a pagar la diferencia dejada de cancelar por concepto de indemnización por despido injusto señalada en el numeral 6.3. del Estatuto de Beneficios Para Empleados de Bancolombia del Mapa de Cargos Profesionales. Condenas todas debidamente indexadas.

En el acápite de pruebas, la actora a adjunta documentales que tenía en su poder, anexando un acápite denominado “**pruebas en poder de la demandada**”, en el que requirió el banco accionado para que aportará un sin número de certificados al momento de dar repuesta de la demanda, conforme a lo establecido en el numera 2 del parágrafo 1 del artículo 31 del CPL. Pruebas que a continuación, se relacionan:

- *Certificado en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S.A., al primero de enero de 2017y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que toma el banco para liquidar las cesantías de un trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que tomo en cuenta para liquidar las cesantías de mi procurada, durante los años 2015,2016,2017,2018.*
- *Comprobantes de nómina de la demandante a partir del 1 de enero de 2015 y hasta culminar la relación laboral.*

- *Certificado laboral en la cual conste que la demandante fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia S.A. y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL desde su ingreso hasta que fue promovida al cargo de Ejecutiva Senior.*

Una vez notificada de la demanda, BANCOLOMBIA S.A dio repuesta, aportando pruebas documentales e indicando que en el aparte de la demanda denominado **“pruebas en poder de la demandada”**, los documentos en poder de BANCOLOMBIA S.A. se adjuntaban como consta en el aparte precedente.

Sin embargo, no se observa que la entidad accionada hubiera anexado las certificaciones a ella requerida, en el libelo genitor.

## **2. DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA:**

La oficina judicial de primera instancia, en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de decreto de pruebas, NEGÓ el decreto de la prueba denominada **“pruebas en poder de la demandada”**, indicando que es abundante la documentación que milita en la foliatura con la que se es posible tomar una decisión de fondo, además de que considera que la demandante no acreditó previamente haber solicitado dicha prueba por medio de derecho de petición, como lo exige el artículo 173 del CGP, razón por la cual no tendría objeto el decreto de la prueba solicitada.

## **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

El apoderado de la demandante, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, solicitando que sea revocada y en su lugar se acceda a decretar la prueba **en poder de la demandada**, por considerar que los documentos requeridos a la demandada BANCOLOMBIA están orientados a dar claridad a los hechos y pretensiones, siendo necesarios para resolver el litigio, debiendo el despacho tenerlos en cuenta, por lo que solicita que se revoque la decisión y se acceda a su requerimiento.

## **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para presentar alegatos de conclusión, la apoderada judicial de Bancolombia presento alegatos de conclusión, los cuales se transcriben en los siguientes términos:

## “SINOPSIS PROCESAL

Sea lo primero hacer un esbozo del trámite procesal que se ha cumplido hasta ahora en el proceso de la referencia, con el fin de dar claridad a mi alegato y a mi oposición a que sea revocado el Auto que negó la solicitud del Apoderado de la Demandante.

1. La demanda fue admitida el 7 de Julio de 2020.
2. El Banco dio respuesta a la demanda dentro de la oportunidad legal, y, en consecuencia, el Juzgado por medio de Auto del 12 de Julio de 2022, la admite y fija fecha para audiencia concentrada - Arts. 77 y 80 CPL-.
3. Ante esta decisión, el Apoderado de la Demandante interpone Recurso de Reposición frente al Auto que dio por contestada la demanda.
4. El Juzgado por Auto de Fecha 25 de Julio de 2022 no repone el Auto que tiene por contestada la demanda, quedando en firme esta decisión.
5. En la primera etapa de la Audiencia -Art.77 CPL- el Sr. Apoderado de la Demandante, REFORMA EXTEMPORÁNEAMENTE el acápite de las pruebas de su escrito de demanda bajo la denominación de “PRUEBAS EN PODER DE LA DEMANDADA”, y las cambia solicitando que se libre el Oficio con las “certificaciones” por él solicitadas, certificaciones que no cumplen con los requisitos del No. 2 del Parágrafo 1 del Artículo 31 del C.P.L. y del Artículo 173 Inciso 2° y del Artículo 243 y SS del C.GP. aplicable por analogía al proceso laboral - Art. 145 C.P.L.-.
6. La Sra. Juez mediante Auto niega esta prueba, decisión frente a la cual el Sr. Apoderado de la Demandante interpone Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, etapa procesal en la que nos encontramos.

## DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

A partir del Artículo 25° y siguientes del CPL se regulan los requisitos de la demanda y de la contestación.

El Inciso segundo del Artículo 28° del C.P.T. Modificado por el Artículo 15 de la Ley 712 de 2001, expresamente consagra la oportunidad procesal para reformar la demanda así:

***“La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvencción, si fuere el caso.”***

La claridad y contundencia de esta norma, me releva de efectuar un mayor análisis de su alcance, por cuanto es claro la etapa procesal en que puede reformarse la demanda, y que en el presente caso lo fue entre el 12 de Julio y el 19 de Julio de 2022, actuación procesal, que como obra en el expediente no fue agotada por el Apoderado de la demandante.

Ahora bien, en la Audiencia Concentrada -Artículos 77 y 80 del C.P.L.- que lo fue el 2 de Noviembre de 2022, en forma EXTEMPORÁNEA, el Apoderado de la demandante Reforma la demanda en el Acápito de la Pruebas, al solicitar que sea librado Oficio con las “certificaciones” por el solicitas en el aparte que, en su escrito de la demanda, denominó “PRUEBAS EN PODER DE LA DEMANDADA”, actuación procesal que al ser extemporánea no procede y con ello que el Auto de la A quo que Negó esta prueba tenga que ser Confirmado. Entenderlo de otro modo implicaría menoscabar el derecho de defensa y contradicción de la parte que represento, por cuanto se extendería el plazo perentorio para reformar la demanda consagrado en el Inciso segundo del Artículo 28° del C.P.L., norma de orden público y de obligatorio cumplimiento, a la vez que permitiría que la reforma fuera al arbitrio de la parte demandante en cada caso.

#### PROCEDIBILIDAD DE DECRETO DE PRUEBA DE OFICIOS

Establece el Inciso 2° del Artículo 173 del Código General del Proceso - aplicable por analogía al Proceso Laboral -Artículo 145 C.P.L.-:

*“En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.**”*

De conformidad con el aparte citado, y dado que desde la expedición de la Ley 1564 del 12 de Julio de 2012 -C.G.P.- que tiene como piedra angular la celeridad en los procesos judiciales, el Juez solo podrá decretar esta clase de prueba -Oficios- cuando la parte interesada, demuestra sumariamente, que ha solicitado la prueba de que se trate en oportunidad anterior a la presentación de la demanda, y que a pesar de ello, el destinatario de esta prueba no ha respondido su requerimiento, incluso la norma exige adjuntar con el escrito de demanda prueba sumaria en este sentido.

Ahora bien, en el proceso que nos ocupa, brilla por su ausencia este soporte exigido por la norma, que se entiende, en razón a que el Apoderado de la demandante, nunca

solicitó dentro de la oportunidad legal que se librarán Oficios a mi representada, lo que reafirma y demuestra lo indicado en precedencia, que no es otra cosa, que mediante esta solicitud pretende reformar la demanda, la que se reitera, es EXTEMPORÁNEA, aunado a que lo solicitado no cumple la tarifa legal de la prueba documental.

Así las cosas, legalmente no procede decretar la prueba así solicitada, toda vez que no cumple el mandato contenido en el Inciso 2° del Artículo 173 del C.G.P., teniendo en consecuencia que ser Confirmado el Auto por medio del cual, la Sra. Juez 15 Laboral del Circuito de Medellín negó esta prueba.

#### DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR COMO PRUEBA EN PODER DE LA PARTE DEMANDA

Establece el numeral 2° del Parágrafo 1° del Artículo 31 del C.P.L. Modificado por el Artículo 18 de la Ley 712 de 2002, denominado forma y requisitos de la contestación de la demanda, que la contestación de la demanda debe ir acompañada de los siguientes anexos:

***“2. Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda, que se encuentren en su poder.”***

La norma es clara, la respuesta a la demanda debe ir acompañada del soporte documental en que esta se fundamenta, como también de los documentos que en relación con la demandante se encuentren en su poder, deber procesal que cumplió mi representado en legal, debida y oportuna forma.

El Código General del Proceso aplicable por remisión expresa al proceso laboral - Art.143 CPT-, en su Artículo 243 y siguientes, se ocupa de definir y regular la prueba documental, ocupándose de indicar expresamente las distintas clases de documentos y todo lo relacionado con su valor probatorio.

Nótese que, en parte alguna de los preceptos normativos anteriormente citados, se le concede la facultad a la parte demandante de solicitar la creación de pruebas, y menos aún de trasladar su carga probatoria a la parte demandada pidiendo la creación de “certificados” que contienen y están indefectiblemente encaminados a que salgan adelante sus pretensiones -omitiendo su obligación procesal y carga probatoria- y lograr mediante una prueba que no está tarifada legalmente, la confesión de la contraparte, lo que necesariamente nos lleva a concluir que dicha solicitud no cumple con los requisitos legales y procesales, y con ello que no se acceda la solicitud de la parte demandante en cuanto al decreto de esta prueba.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, por medio de este escrito, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados CONFIRMAR el AUTO proferido por la Sra. Juez 15 Laboral del Circuito de Medellín que negó la prueba solicitada por el Sr. Apoderado de la Demandante, toda vez que la misma no fue solicitada en la oportunidad legal, sino en forma EXTEMPORÁNEA -vía Reforma a la Demanda-, y por no cumplir con los presupuestos normativos aplicables; en lo especial -Artículo 28 inciso 2°, y numeral 2 del Parágrafo 1° del Artículo 31 del C.P.L., y en lo general con lo señalado en el Inciso 2° del Artículo 173, y en el Artículo 243 y siguientes del C.G.P.”

## 5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

La decisión en esta instancia se circunscribe a establecer si en el presente proceso, hay lugar o no a decretar la prueba solicitada por la demandante, referidas a “**pruebas en poder de la demandada**”.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba, conforme al numeral 4 del Artículo 65 del CPT y de la SS, se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

## 6. CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Primeramente, encuentra este cuerpo colegiado que la forma en que el apoderado de la actora, solicitó la prueba denominada “**prueba en poder de la demandada**”, resulta antitécnica, ya que los documentos relacionados y que indica que reposan en los archivos de la entidad accionada, salvo los *Comprobantes de nómina de la demandante a partir del 1 de enero de 2015 y hasta culminar la relación laboral*”, no son documentos que se pueda considerar que el banco tiene en su poder, sino que se trata de certificaciones que se requiere sean elaboradas referentes a información de la empresa en relación con los trabajadores, documentos que debe proceder el banco a elaborar para el caso en particular, y no que se pueda pensar que tiene en su poder.

Sin embargo, el hecho que se encuentre mal nombrada o solicitada la citada prueba, ello no es óbice para denegar esta probanza en caso de considerarse pertinente y conducente, como más adelante será analizado por la sala.

Y es que, de vieja data nuestro órgano de cierre, ha sostenido que al juez del trabajo como director de proceso le está asignada la tarea de la interpretación de la demanda desentrañando el verdadero alcance e intención del demandante.

Sobre este punto en particular, se resalta lo dicho por la CSJ SL en sentencia del tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017), SL6621-2017 Radicación n.º 49346, M.P CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, en la que se cita textualmente:

“...La Corte ha sostenido que los jueces del trabajo tienen el deber de interpretar la demanda para desentrañar la real aspiración del demandante. Con mayor razón cuando la pretensión está encaminada a la satisfacción de un derecho fundamental y los elementos que lo configuran están debidamente descritos, probados y discutidos. Por ejemplo, en sentencia SL17413-2014, en un caso de similares contornos, señaló: [...] Nótese que si bien la parte demandante en el escrito de demanda inaugural no se refirió expresamente a la pensión sanción sino a la de jubilación, en la causa petendi describe sus elementos como el despido injustificado de la actora después de varios años de trabajo o antigüedad en la empresa y la no afiliación a la seguridad social en pensiones, lo que hace comprensible tener como derecho pensional demandado la denominada pensión sanción, al cual la alzada limitó su análisis. Radicación n.º 49346 47 **Adicionalmente, cabe también precisar, antes de despachar la acusación, que al encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos..**”

Siendo dable concluir que por el hecho de que el citado apoderado, no haya solicitado adecuadamente esta prueba, no es factible desechar la misma como se dijo con antelación.

Ahora, el artículo 60 del CPT y SS, contiene la regla de la necesidad de la prueba, la que le impone al juez, la obligación de decidir con las pruebas oportunas y legalmente allegadas y practicadas.

Igualmente debe señalarse que en materia probatoria disponen los artículos 164 y 167 del CGP lo concerniente a la carga de la prueba que tiene las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, norma esta que se utiliza en materia laboral y de seguridad social (art. 145 CPT y SS), teniendo en cuenta que en virtud de la dinámica de la prueba este criterio se modera, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.



En relación a lo anterior, es del caso tener presente lo enseñado por la doctrina en relación a lo que se ha definido por **conducencia probatoria**, esto es, “la idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar determinado hecho”, así mismo, respecto a **la pertinencia** se ha explicado que “es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste”; no obstante, suele ocurrir que las pruebas conducentes y pertinentes pueden ser rechazadas por resultar inútiles o superfluas para el proceso, entendiendo por utilidad de la prueba, el aporte que pueda llevar al proceso para cumplir el fin de crear certeza a cerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva.

En cuanto a la “la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente” (CSJ AP, 17 Mar 2009, Rad. 22053; AP1282-2014 y STP10016-2019).

En estas condiciones, a juicio de la Sala, lo que se busca con la prueba requerida a la entidad accionada ciertamente es ahondar en garantías, ampliándose además el acopio probatorio para que el fallador cuente con suficientes elementos de juicio y tome la decisión que en derecho corresponda, máxime que en el caso, además se discute un tema convencional, salarial y prestacional, siendo entonces un asunto de raigambre constitucional (Art.53 C.N), por lo cual con mayor razón, la prueba solicitada no resulta superflua, pues el decreto de ésta puede generar una mayor claridad en el asunto, al contar con mayores elementos probatorios para establecer si hubo o no un déficit en las los pagos realizados a la demandante.

Por lo anterior, para la Sala resultan claramente idóneas las pruebas que fueron denegadas, y si bien el argumento de la entidad accionada de no aportar los documentos solicitados por no contar con los mismos, y que solo tenía a su alcance los anexados con la repuesta a la demanda, en principio es pertinente, pues en verdad no se trata de documentos que tenga en su poder, sí es procedente que elabore las certificaciones solicitadas, al menos en lo que le conste, pues podría suceder que alguna de la información solicitada, no esté al alcance del banco demandado, sino de las organizaciones sindicales que cita la actora en la demanda.

Colofón de lo anterior, habrá de revocarse el auto del pasado 2 de noviembre de 2022, para en su lugar, decretar la prueba consistente en que el banco demandado elabore y aporte:

- *Certificado en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S.A., al primero de enero de 2017 y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que toma el banco para liquidar las cesantías de un trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que tomo en cuenta para liquidar las cesantías de mi procurada, durante los años 2015,2016,2017,2018.*

Igualmente, la accionada aportará, si ya no lo hubiere efectuado: *“Comprobantes de nómina de la demandante a partir del 1 de enero de 2015 y hasta culminar la relación laboral.”*

En el caso que el banco demandado no cuente con alguna de la información solicitada, así lo indicará ofreciendo las explicaciones pertinentes.

Es preciso advertir, que es un deber legal de las empresas conservar los documentos generados en virtud de la relación laboral, aun cuando ya no exista la misma, pues esta obligación por parte del empleador, debe ser entendida como un derecho del trabajador que no prescribe. Ver Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y auto de la sala laboral AL 1198 de 2022

Ahora, respecto del *“Certificado laboral en la cual conste que la demandante fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia S.A. y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL desde su ingreso hasta que fue promovida al cargo de Ejecutiva Senior”* considera la Sala que tal certificación sí debe ser gestionada, conseguida y aportada por la demandante, pues no se halla que pueda ser una información que tenga el banco accionado sino las citadas organizaciones sindicales, por lo que se decretará esta prueba, pero deberá ser la accionante la que aporte tal certificado.

Respecto de la anterior prueba si bien el Nral 10 del Artículo 78 del CGP establece que son deberes de las partes y sus apoderados: *“10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”*, esta Sala ha considerado que la consecuencia de la falta el referido deber, no es negar la prueba, sino decretarla dejándole la carga a quien la pide la gestione y la aporte.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

**RESUELVE:**

**REVOCAR** el auto del 2 de noviembre de 2022 emitido por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, para en su lugar DISPONER, que el banco demandado elabore y aporte:

- *Certificado en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S.A., al primero de enero de 2017 y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y el primero de julio de 2017.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que toma el banco para liquidar las cesantías de un trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo.*
- *Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que tomo en cuenta para liquidar las cesantías de mi procurada, durante los años 2015,2016,2017,2018.*

Igualmente, la accionada aportará, si ya no lo hubiere efectuado: “*Comprobantes de nómina de la demandante a partir del 1 de enero de 2015 y hasta culminar la relación laboral.*”

En el caso que el banco demandado no cuente con alguna de la información solicitada, así lo indicará ofreciendo las explicaciones pertinentes.

Igualmente se decreta la prueba consistente en “*Certificado laboral en la cual conste que la demandante fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Bancolombia S.A. y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL desde su ingreso hasta que fue promovida al cargo de Ejecutiva Senior*” certificación que debe gestionar, conseguir y aportar por la demandante.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° **027** del **17 DE FEBRERO DE 2023**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

**Firmado Por:**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fc4cd31da77c9f31ddddf015128ee7fff856df6ac064d80974b96b194e967ace**

Documento generado en 16/02/2023 01:42:17 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**